

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

[Política de Medidas Antifraude, abril de 2024]

Empresa adherida a



ER-0885/1998 001/00 Tragsa
GA-2003/0120 001/00 Tragsa
SR-0229-ES-001/00 Tragsa
ER-0885/1998 002/00 Tragsatec
GA-2003/0120 002/00 Tragsatec
SR-0229-ES-002/00 Tragsatec

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN.....	5
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	7
4. MARCO CONCEPTUAL.....	8
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.....	12
5.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.....	12
5.2. COMITÉ ANTIFRAUDE.....	12
5.2.1. Funciones.....	12
5.3. COORDINADORES ANTIFRAUDE DE LAS DISTINTAS UNIDADES TERRITORIALES Y DE TRAGSATEC.....	14
5.4. UNIDAD DE COMPLIANCE.....	14
5.5. EMPLEADOS DE GRUPO TRAGSA.....	15
6. ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN.....	16
6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.....	16
6.1.1. Autodiagnóstico como piedra angular del Sistema Preventivo.....	16
6.1.2. Política Antifraude.....	17
6.1.3. Formación y concienciación.....	17
6.1.4. Prevención del conflicto de intereses y procedimiento para dar respuesta a su concurrencia.....	18
6.1.5. Código Ético.....	18
6.1.6. Evaluación de Riesgos.....	18
6.1.7. Sistema de Control Interno.....	19
6.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN.....	19
6.2.1. Utilización de indicadores: banderas rojas.....	19
6.2.2. Comunicación de actuaciones presuntamente fraudulentas.....	20
6.2.3. Detección de un posible fraude.....	21
6.2.4. Comunicación a la Comisión Europea.....	21
6.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN.....	21
7. MEDIDAS Y PROCESOS RELATIVOS A SITUACIONES DE CONFLICTOS DE INTERES.....	24
8. MEDIDAS Y PROCESO RELATIVOS A LA DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.....	26
8.1. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN.....	26
9. DOBLE FINANCIACIÓN.....	27
10. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.....	29
11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.....	30
11.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	30
11.2. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.....	30
11.3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTUALIZACIONES O CAMBIOS.....	30

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

12.	REFERENCIAS NORMATIVAS.....	31
-----	-----------------------------	----

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece el “Plan de Medidas Antifraude” de Grupo TRAGSA, de conformidad con lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es un instrumento promovido por la Unión Europea para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19, transformando la sociedad con el objetivo de modernizar el tejido productivo, impulsar la “descarbonización” y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y a la formación; y conseguir, en definitiva, una mayor capacidad de la sociedad a la hora de dar respuesta a problemas como el de la pandemia.

Para ello, el mencionado Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, establece en su artículo 22 una serie de medidas a aplicar por los Estados miembros que vayan a ejecutar dicho Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión Europea y velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas se ajuste al Derecho nacional y de la Unión, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y a la identificación de los beneficiarios últimos de las ayudas, así como de los contratistas y subcontratistas.

En cumplimiento de lo anterior, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (en adelante, OM de Gestión), establece la obligación a todos los elementos que participen en la atribución, gestión y beneficios de fondos procedente de la UE al refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Así, su artículo 6 establece a toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR la obligación de disponer de un “Plan de Medidas Antifraude” que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en materia de prevención, detección y corrección de fraude, corrupción y conflictos de intereses.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN

El presente documento incorpora los mecanismos a implantar por el Grupo TRAGSA, para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, de manera proporcionada, atendiendo a las características específicas y a la evaluación de los riesgos de fraude y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión Europea.

Las medidas contenidas en este “Plan de Medidas Antifraude” se estructuran en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude:

- Prevención
- Detección
- Corrección
- Persecución

Las medidas definidas son de aplicación a todo el personal del Grupo TRAGSA.

El Grupo TRAGSA tiene el compromiso firme y absoluto de evitar, y no tolerar en absoluto, conductas de fraude, corrupción ni la existencia de conflictos de intereses; y de garantizar que, en su ámbito de actuación, los fondos gestionados se han utilizado de conformidad con las normas de aplicación, protegiendo los intereses financieros de la Unión en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR). En el caso de que, pese a los medios establecidos para evitar la ocurrencia de las anteriores conductas, se cometan las mismas, se adoptarán las medidas necesarias, con plena colaboración con las autoridades competentes para que se aclaren las responsabilidades oportunas de cualquiera de los responsables.

La OM de Gestión configura como actuaciones obligatorias para el Grupo TRAGSA, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.

En función de las especificaciones del artículo 6.5 de la OM de Gestión, el presente Plan de Medidas Antifraude contiene los siguientes requisitos mínimos:

- a) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada en torno a los cuatro elementos clave del “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y persecución.
- b) Prever la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude (Anexo II.B.5 de la OM de Gestión) en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.
- c) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

- d) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
- e) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.
- f) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia gastado fraudulentamente.
- g) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.
- h) Definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, resultará obligatoria la suscripción de una Declaración de Ausencia de Interés por quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

El presente Plan de Medidas Antifraude está sujeto a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en adelante, Reglamento Financiero de la UE), así como a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Asimismo, se ha tenido en especial consideración las orientaciones elaboradas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) destacándose los siguientes documentos: “Detección de documentos falsificados en el ámbito de las acciones estructurales”; “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales”; “Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales” y también, la nota informativa sobre los indicadores de fraude al FEDER, al FSE y al FC (COCOF 09/003/00 del 18 de febrero de 2009).

Por último, para la elaboración del Plan, se ha tomado como referencia tanto la “*Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020*” en la que se desarrollan medidas efectivas y proporcionadas contra el riesgo aplicando el Artículo 125.4 c) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; como la Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) de orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La observancia y aplicación de las medidas definidas en el presente Plan Antifraude es imperativa para todo el personal del Grupo TRAGSA.

Todos ellos deben conocer y cumplir el presente Plan, y por tanto les corresponde a ellos especialmente el cumplimiento de las siguientes funciones:

- Actuar en todo momento conforme a los más altos niveles de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez.
- Llevar a cabo las medidas de prevención, detección y corrección establecidas en el presente Plan antifraude y en los documentos que lo complementan, así como en la normativa aplicable con respecto a la gestión de los fondos del MRR.
- Analizar con detalle cualquier sospecha de fraude y/o la existencia de conflictos de intereses.
- Abstenerse de ejecutar procedimientos de gestión, control y/o pagos en relación con los fondos del MRR que presenten indicios de fraude.
- Atender las solicitudes de información relativas a las alertas enviadas al Coordinador Antifraude o a cualquier otra información que esta requiera.
- Obligatoriedad de realización y asistencia a jornadas formativas.

El personal del Grupo TRAGSA que participe en cualquier parte del procedimiento de gestión de fondos del MRR, deberá cumplimentar, de manera previa, la Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses, adjunta al Plan antifraude como **ANEXO I**.

4. MARCO CONCEPTUAL

El fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, suponen una grave amenaza para la seguridad y los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Las instituciones de la UE tienen como prioridad proteger estos intereses, tanto para dar el mejor uso posible al dinero de los contribuyentes, como para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para los que la corrupción es un terreno fértil.

Los Estados Miembros deben informar a la Comisión de determinadas irregularidades detectadas, que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial. De los cambios significativos que se produzcan en dichos procedimientos, así como la indicación de la posible existencia de fraude.

Al objeto de garantizar la disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y seguridad de la información, los Estados Miembros deben utilizar el Sistema de Gestión de Irregularidades (Irregularity Management System, IMS), dispuesto para tal fin en la plataforma del Sistema de Información Antifraude creado por la Comisión.

Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).

En este sentido, entendemos por:

- **FRAUDE.** Según el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (denominada Directiva PIF), en materia de gastos, se considera fraude a cualquier acción u omisión intencionada, relativa:
 - A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
 - Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto;
 - Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio.

- **SOSPECHA DE FRAUDE.** El artículo 1 bis, punto 4, del Reglamento (CE) nº 1681/94 define «sospecha de fraude» como “irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, en particular de un fraude”. Esta definición se reproduce en el artículo 27, letra c), del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

- **IRREGULARIDAD.** El término «irregularidad» es un concepto amplio, que abarca tanto las irregularidades intencionadas como las no intencionadas cometidas por los agentes económicos.

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/955 define «irregularidad» como: “toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”.

Por su parte, el artículo 1 bis del Reglamento (CE) nº 1681/94 contiene una definición adaptada: «irregularidad» como “cualquier infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades Europeas por la imputación al presupuesto comunitario de un gasto indebido”.



Por tanto, el elemento de engaño intencionado es el que distingue el fraude del término más general de irregularidad. Con arreglo al artículo 3, letra e), del Reglamento (CE) nº 1681/94, desde 2006 los Estados miembros deben precisar, al comunicar irregularidades a la Comisión, si dichas irregularidades revelan sospechas de fraude.

- **CORRUPCIÓN.** es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio privado, directo o indirecto. A efectos de la presente Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, se entenderá por:
 - **Corrupción pasiva** la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.
 - **Corrupción activa** la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

- **CONFLICTO DE INTERÉS.** El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 establece que existe Conflicto de Interés «cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal». Sus principales características son:
 - Es aplicable a todas las partidas administrativas y operativas en todas las Instituciones de la UE y todos los métodos de gestión.
 - Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto.
 - Ante cualquier situación que se «perciba» como un potencial conflicto de intereses se debe actuar.
 - Las autoridades nacionales, de cualquier nivel, deben evitar y/o gestionar los potenciales conflictos de intereses.

En función de la situación que da lugar a este conflicto de interés, podemos distinguir entre:

- **Conflicto de intereses aparente** se produce cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).
 - **Conflicto de intereses potencial** surge cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.
 - **Conflicto de intereses real** implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.
- **DOBLE FINANCIACIÓN.** De acuerdo con el artículo 191.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas fi-

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

nancieras aplicables al presupuesto general de la Unión, en ningún caso los mismos gastos pueden ser financiados dos veces por el presupuesto y, con carácter general para las subvenciones, el artículo 188 del citado Reglamento prohíbe expresamente la doble financiación.

En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la doble financiación se produce, según el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 que lo establece, cuando las reformas y proyectos de inversión estén financiados por el Mecanismo y simultáneamente por otro instrumento de la Unión, siempre que cubran el mismo gasto o coste.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

5.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Si bien la puesta en práctica de este Plan de Medidas Antifraude se extiende a toda la organización, conceptualmente se pueden diferenciar tres líneas de defensa que se corresponderían, fundamentalmente, con distintos ámbitos funcionales y organizativos del Grupo TRAGSA:

- **Primera línea de defensa:** estará constituida por los propios ámbitos organizativos y personas directamente involucrados en la gestión de los fondos procedentes del PRTR (Unidades Territoriales y Tragsatec), partiendo de los aspectos administrativos, de contratación y financieros y llegando hasta la propia gestión de los contratos y la ejecución de los trabajos por parte de los departamentos técnicos y de su gestión de las empresas subcontratadas.
- **Segunda línea de defensa:** esta segunda línea tiene por objeto asesorar a los ámbitos directamente involucrados en primera línea, así como establecer los mecanismos que aseguren la lucha contra el fraude, velando por la eficacia de los mismos.

El trabajo técnico podrá ser delegado en los Coordinadores Antifraude de las diferentes áreas de actividad que, junto a la Unidad de Compliance, asegurarán la revisión y actualización periódica del Plan de Medidas Antifraude, la normativa interna o protocolos específicos para su implantación, y la diferente documentación en despliegue del mismo.

- **Tercera línea de defensa:** tiene por objeto supervisar a las demás líneas de defensa, mediante la verificación de las mismas de manera totalmente objetiva e independiente. Este cometido se desempeñará por la Dirección de Auditoría Interna, reportando al Comité Antifraude con la frecuencia establecida.

5.2. COMITÉ ANTIFRAUDE

El Comité Antifraude es el órgano responsable de la supervisión de la adecuada aplicación de las medidas antifraude en materia de prevención, detección, corrección y persecución por parte del Grupo Tragsa. El Comité Antifraude estará formado por las personas incluidas en el Órgano de Cumplimiento del Grupo Tragsa, junto con la persona que ocupe el puesto de Subdirector de Presupuestos y Control de Gestión y la persona que ocupe el puesto de Subdirector de Administración y Finanzas.

5.2.1. Funciones

Al Comité Antifraude se le asignan las siguientes funciones:

- Velar, en todo momento, por el cumplimiento por parte de todos los empleados de las disposiciones legales y normativa interna del Grupo TRAGSA.
- Impulsar el código ético y de tolerancia cero ante el fraude, la corrupción y la existencia de conflictos de intereses en el Grupo TRAGSA.

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

- Ser la unidad o la autoridad de contacto en materia antifraude.
- Estar debidamente informado del progreso y desarrollo de las actuaciones de todo el personal del Grupo TRAGSA que participe en la gestión y/o ejecución de los fondos del MRR.
- Aprobar los criterios y directrices generales actualizadas para que los Coordinadores Antifraude lleven a cabo las acciones periódicas sobre el riesgo.
- Analizar situaciones o casos que supongan un especial riesgo y que se pongan en su conocimiento a través de los coordinadores antifraude. Supervisar las modificaciones en los sistemas de control para mitigar los riesgos.
- Ser informado de aquellas otras cuestiones que sean elevadas por los Coordinadores Antifraude.
- Custodiar, a través de la Dirección de Auditoría Interna y mediante los canales ya existentes del Grupo TRAGSA, la documentación referente al Plan de Medidas Antifraude, su desarrollo, ejecución práctica, así como toda aquella información documentada resultante en la gestión de los fondos del MRR en el Grupo TRAGSA
- Tutelar el funcionamiento del canal de denuncias, dirigir la acción del Compliance Officer, y tomar posición sobre las cuestiones que este le traslade.
- Informar de los fondos que se ha tenido conocimiento que han sido objeto de apropiación indebida, suministrando la información necesaria a las entidades u organismos encargados de velar por la recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los beneficiarios.
- Asegurar la aplicación del régimen disciplinario que sancione, adecuada y proporcionalmente, el incumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Medidas Antifraude.
- Denunciar, en caso de ser necesario, a las Autoridades competentes, Ministerio Fiscal y/o Tribunales los casos de fraude, corrupción y la existencia de conflictos de intereses.
- Aprobar el informe de evaluación anual sobre el grado de cumplimiento de las medidas del Plan que será presentado al Consejo de Administración.

El Comité Antifraude podrá solicitar en el ejercicio de sus funciones la colaboración de otros órganos, departamentos, áreas y personas del Grupo TRAGSA, así como de asesores externos.

5.3. COORDINADORES ANTIFRAUDE DE LAS DISTINTAS UNIDADES TERRITORIALES Y DE TRAGSATEC

En cada Unidad Productiva (Unidad Territorial o Subdirección) designará un coordinador antifraude – Jefe de Unidad Territorial o Subdirector - que podrá delegar en personal de su Unidad con conocimientos suficientes para el cumplimiento de las siguientes funciones dentro de su ámbito de actuación:

- La supervisión y evaluación del funcionamiento regular y de la correcta aplicación de las medidas de prevención, detección y corrección en relación con los riesgos que afectan a la ejecución del MRR, incluida la evaluación de riesgos, detectando vulnerabilidades y proponiendo acciones.
- La supervisión de la eficacia de los controles internos de gestión desarrollados en relación con el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación con la finalidad de proponer mejoras o adaptaciones a las nuevas necesidades surgidas.
- Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos de gestión de conflictos de intereses.
- Velar por la existencia de documentación soporte de:
 - los controles internos realizados y de la evaluación de riesgos de fraude;
 - las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de todos los participantes en las actuaciones.
- Garantizar que el personal dispone de los conocimientos y recibe la información necesaria para poder llevar a cabo, en su ámbito específico de actuación, las acciones que procedan en relación con los riesgos de fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación; y ofrecer, en su caso, la formación necesaria para ello.
- Remitir a la Unidad de Compliance la información necesaria para que se elabore la propuesta e incluya al informe de evaluación anual sobre el grado de cumplimiento de las medidas del Plan.
- Aquellas otras funciones que le asigne el Comité Antifraude.

5.4. UNIDAD DE COMPLIANCE

- Se asegurarán la revisión y actualización periódica del Plan de Medidas Antifraude, la revisión de normativa interna o protocolos específicos para su implantación, y la diferente documentación en despliegue del mismo.
- Elaborar la propuesta de informe de evaluación anual sobre el grado de cumplimiento de las medidas del Plan.

5.5. EMPLEADOS DEL GRUPO TRAGSA

Contribuir mediante sus comportamientos individuales al cumplimiento de los objetivos de este Plan.

6. ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

El Plan de Medidas Antifraude es un documento que contempla las medidas tendentes a la prevención, detección, corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, y a evitar la doble financiación, cumplimiento los requerimientos previstos en el artículo 22 del Reglamento MRR, en el Plan de Recuperación y en el Acuerdo de Financiación firmado entre la Comisión Europea y España y en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así:

- a) las medidas antifraude se estructuran de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.
- b) Define medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.
- c) Prevé la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
- d) Define los mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.
- e) Establece procesos para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y apoyo a la entidad ejecutora/gestora en la recuperación de los fondos de la UE gastados fraudulentamente

6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La reducción de la corrupción, del fraude o del conflicto de intereses implica realizar una importante labor preventiva que consiga atajarla en su origen y no únicamente en la actuación pública sino también, en aquellas entidades privadas, receptoras de fondos públicos, que han ejecutado una prestación sabiendo que estaban vulnerando el ordenamiento jurídico y que, con ello, estaban haciendo prevalecer sus intereses particulares frente al interés general, generando irregularidades tales como el abuso de la figura del enriquecimiento injusto, la inejecución de subvenciones, riesgos de cautivar a los poderes públicos, etc.

La fase de prevención afecta de forma horizontal a todas las unidades del Grupo TRAGSA implicadas en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a otras entidades y unidades externas que colaboren en la gestión de sus medidas y demuestra asumir un compromiso firme de lucha contra el fraude y la corrupción.

Los métodos de prevención que se incluyen en el presente «Plan de Medidas Antifraude» consisten en reducir las posibilidades de cometer fraude mediante la implantación de potentes sistemas de control interno, junto con una evaluación del riesgo proactiva, estructurada y específica.

6.1.1. Autodiagnóstico como piedra angular del Sistema Preventivo

La implantación del presente Plan de Medidas Antifraude toma como punto de partida el autodiagnóstico en materia de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal en base al cuestionario de autoevaluación incluido en el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva PIF y en el Reglamento Financiero de la Unión Europea. **ANEXO II.**

6.1.2. Política Antifraude

Mediante el presente plan se pone de manifiesto el claro compromiso del Grupo TRAGSA con la adopción de medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés y para evitar la doble financiación.

Además, se manifiesta el compromiso de toda la organización a respetar el Código Ético y las normas establecidas para la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el desarrollo de la Política Antifraude, y para dar muestra de este compromiso, el personal de los órganos responsables debe dar ejemplo de integridad y generar un ambiente de diálogo con los gestores para favorecer la expresión de los puntos de vista sin temor a represalias. A su vez, los gestores tienen que percibir que hay una tolerancia cero con los casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación.

Tales compromisos están contenidos en una declaración institucional firmada por el máximo responsable de la entidad decisora y ejecutora, de la cual se dará la adecuada difusión a todos los órganos responsables y gestores del mecanismo. Se adjunta como **ANEXO III** dicha declaración.

6.1.3. Formación y concienciación

El objetivo de la formación y la sensibilización, dirigida a todos los niveles jerárquicos del Grupo TRAGSA, supone que todos integrantes tomen conciencia sobre la necesidad de luchar contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación, adquieran capacitaciones para identificar y responder a los presuntos casos en los que se materialicen los citados riesgos.

El Grupo TRAGSA impulsará acciones de formación específicas, planes de formación con un itinerario formativo concreto en materia antifraude, para todo el personal que gestione, en cualquiera de sus fases, la ejecución del PRTR, con especial tratamiento de los conflictos de interés y actos que pueden constituir señales de advertencia de posible existencia de fraude.

La finalidad de la formación será suministrar información pormenorizada sobre las políticas contra el fraude, en especial las desarrolladas por el Grupo TRAGSA, la función de cada una de las partes implicadas en su implementación y sus respectivas responsabilidades, así como los mecanismos de notificación.

Con respecto a la concienciación, se prevé la adopción de las siguientes medidas de comunicación y sensibilización:

- a) La difusión de los principios y comportamientos éticos y de concienciación y del régimen disciplinario de los empleados públicos.
- b) Definición de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación, incluyendo las conductas o prácticas en las que se suelen manifestar.
- c) La formación en metodologías para la identificación y la lucha contra el fraude y de la herramienta para la evaluación de riesgo.

6.1.4. Prevención del conflicto de intereses y procedimiento para dar respuesta a su concurrencia

En relación con el tratamiento de los conflictos de intereses véase lo indicado en el apartado 7 de este Plan.

6.1.5. Código Ético

Grupo TRAGSA dispone de un Código Ético en vigor, que es de aplicación a todos los empleados, incluido la estructura directiva y el Consejo de Administración.

Todo el personal está por tanto adherido al mismo con carácter general y permanente. Los eventuales incumplimientos del Código Ético están contemplados en el Régimen Disciplinario de Grupo TRAGSA.

6.1.6. Evaluación de Riesgos

Tiene por objetivo la evaluación de la probabilidad e impacto de determinados riesgos específicos de fraude en los métodos de gestión más comunes aplicados en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los métodos de gestión de actuaciones comprendidas en los MRR son los mismos para todas las actuaciones del Grupo TRAGSA, se realizan a través de la figura del ENCARGO de la AAPP al Medio Propio.

Si bien la evaluación de riesgos se ha incluido entre las medidas preventivas, hay que indicar que esta afecta tanto la prevención como a la detección, ya que de ella pueden derivarse dos tipos de controles:

Controles preventivos o ex ante, que están orientados a impedir que las situaciones de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación ocurran.

Controles de detección o ex post (alertas o banderas rojas) que están dirigidos a identificar situaciones de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación lo más rápido posible, después de que se hayan producido, con la finalidad de mitigar los daños.

Una vez ha sido realizada la evaluación inicial del riesgo en 2022, será revisada con una periodicidad anual, basándose en los resultados de las actividades de control desarrolladas, lo que redundará en la modificación o adaptación de los controles preventivos y de detección.

En el **ANEXO IV**, se incluye la herramienta o matriz de riesgos que se utiliza para la evaluación del riesgo y que ha sido propuesta por el SNCA en la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está referida a los métodos de gestión más frecuentes (subvenciones nacionales, contratos públicos, convenios y encargos a medios propios), sin perjuicio de que puedan agregarse otras tipologías de negocios jurídicos.

Teniendo en cuenta los principios del Reglamento del MRR, esta herramienta incorpora además de los indicadores de riesgo de fraude y corrupción, otros relativos a la posible concurrencia de conflicto de interés y doble financiación.

6.1.7. Sistema de Control Interno

En el contexto de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el sistema de control interno de gestión está formado por el conjunto de políticas y procedimientos elaborados y aplicados por una organización con el fin de garantizar el logro de sus objetivos de forma económica, eficiente y eficaz, el cumpliendo la legalidad vigente, que incluya medidas que permitan la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y evitar la doble financiación.

Todo el personal encargado de los diferentes procesos de gestión y control, colaborará para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras, extendiéndose este compromiso a las funciones que se desarrollen en relación con la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU).

6.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN

La detección es una etapa crítica en la lucha contra el fraude y es el momento en el que se espera que los conocimientos adquiridos y las herramientas establecidas por la entidad involucrada en la gestión e implementación del Mecanismo produzcan resultados. Las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección completa contra el fraude y, por tanto, se necesitan sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapen a la prevención. En consecuencia, una buena estrategia contra el fraude debe tener presente que es preciso diseñar y ejecutar medidas de detección del fraude.

Es importante que todas las medidas de detección sean eficientes y proporcionales al nivel y naturaleza de los riesgos de fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación identificados, tanto en cantidad (número de medidas) como en calidad (naturaleza de las medidas).

Para facilitar la detección del fraude es necesario emplear diversas herramientas entre las que se incluyen el uso de bases de datos, la definición de indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) así como el establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las posibles sospechas del fraude por quienes lo hayan detectado.

6.2.1. Utilización de indicadores: banderas rojas

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. Pueden considerarse un indicador que alerta de que está teniendo lugar una actividad fraudulenta o se está produciendo corrupción.

Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual tiene carácter atípico o difiere de la actividad normal y debe examinarse con más detenimiento.

Aunque las banderas rojas no implican necesariamente la existencia de fraude u otras irregularidades, sí indican que una determinada área de actividad necesita vigilancia y atención extra para descartar o confirmar una irregularidad o fraude potencial. Por consiguiente, su propósito es llevar a cabo un primer

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

nivel de control para disipar las dudas o confirmar la posibilidad de la existencia de un fraude o irregularidad y, en este último caso, para adoptar las medidas necesarias que se requieran para una reacción inmediata y comprobar si es necesaria alguna acción complementaria.

En el marco de la estrategia contra el fraude del Grupo TRAGSA, el presente «Plan de Medidas Anti-fraude» prevé, a partir de la herramienta de detección del fraude (Matriz de Riesgos), el desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y la puesta en conocimiento de los mismos al personal gestor en posición de detectarlos a través de sus controles administrativos y sobre el terreno.

El empleo de estos indicadores de fraude conlleva que a cada riesgo identificado mediante la correspondiente evaluación se le asociará una o varias banderas rojas, de forma que la aparición de uno o varios de los indicadores o banderas rojas contruidos al efecto, constituirá uno de los principales criterios para determinar la existencia de posible sospecha de fraude.

La batería de riesgos a la que se asociarán las banderas rojas, permitirá el análisis de cada uno de los instrumentos de gestión (contratos públicos, convenios y encargos, principalmente) que pueden ser utilizados durante la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este catálogo será tenido en cuenta por el Grupo TRAGSA, recogándose en el **ANEXO V** Sistema de Indicadores de Fraude las más utilizadas en la Unión Europea.

6.2.2. Comunicación de actuaciones presuntamente fraudulentas

El Grupo TRAGSA dispone de un canal del informante que asegura que se mantiene en anonimato del denunciante y que los hechos denunciados se investigan siguiendo un protocolo sistematizado. Se dispone de una plataforma tecnológica que facilita el acceso a este canal por parte de todos los empleados y asegura la consistencia del proceso.

El canal del informante del Grupo TRAGSA permite dar a conocer no solo la posible comisión de determinados delitos en el seno de Grupo TRAGSA, sino también denunciar cualquier tipo de incumplimiento del Código Ético. Además, se pueden plantear consultas y preguntas que surjan en la aplicación de las normas y procedimientos internos relacionados con el Cumplimiento Normativo.

Dicho canal garantiza la confidencialidad del denunciante, permitiendo incluso presentar denuncias anónimas. Además, se garantiza la prohibición de represalias y la presunción de inocencia, y se aplican medidas sancionadoras en caso de denuncias falsas.

Su gestión se basa en un Protocolo de Actuación y Decisión ante posibles ilícitos en el Grupo TRAGSA en el que se fijan las distintas fases y los plazos desde el momento que se recibe una denuncia, se realizan las pertinentes investigaciones, y se concluye tomando las medidas internas o externas que correspondan.

El canal del informante está disponible en la intranet y web del Grupo TRAGSA, en el espacio habilitado para el mismo.

6.2.3. Detección de un posible fraude

En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, se deberá:

- Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el plazo más breve posible a las unidades implicadas en las actuaciones y revisar todos los proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo.
- Con arreglo a la legislación vigente, adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar el procedimiento en curso.
- Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora que ha encomendado al Grupo TRAGSA la ejecución de las actuaciones, así como comunicar el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento, y a la Autoridad de Control.
- Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude –OLAF-.
- Evaluará la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual, y en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude, financiados o por financiar, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

6.2.4. Comunicación a la Comisión Europea

Se mantendrá una coordinación adecuada con las autoridades responsable y de control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyendo al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, responsable de la lucha contra la corrupción, a efectos de informar a la Comisión Europea sobre la existencia de casos de fraude a través de los correspondientes informes.

6.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN

Una vez detectado un caso de presunto fraude y notificado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de comunicación del punto anterior, el Grupo TRAGSA informará debidamente a los órganos correspondientes, lo cuales sean responsables en cada caso de abrir una investigación y si procede emprender la recuperación de los importes indebidamente percibidos o la acción penal correspondiente.

En función de las especificaciones del artículo 6.6 de la OM de Gestión, una vez se detecte un posible fraude o sospecha fundada, el Grupo TRAGSA, deberá seguir los siguientes pasos obligatorios:

- **Evaluación y clasificación del fraude**

El Grupo TRAGSA evaluará la incidencia del fraude apoyándose, entre otra documentación, en los informes de evaluación, aportada por cualquier interviniente en la medida.

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

- **Revisión, suspensión y/o cese de actividad**

El Grupo TRAGSA informará a la Administración competente sobre la detección de un posible fraude, o su sospecha fundada. La detección de un posible fraude conllevará la suspensión inmediata del subproyecto o actuación que estuviere financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La suspensión quedará supeditada a la decisión de la Administración competente.

Por ello, el Grupo TRAGSA, deberá revisar todos aquellos subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo, así como toda la documentación relacionada con los mismos que haya podido aportar los intervinientes y, en todo caso, informará a la Administración quien será la encargada de retirar aquellos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el Mecanismo.

- **Sistema de comunicación**

El Grupo TRAGSA se compromete a notificar en el más breve plazo posible la detección de posible fraude, o su sospecha fundada tanto a las entidades interesadas como a los organismos implicados en la realización de las actuaciones.

Las entidades interesadas serán el Servicio Nacional de Coordinación Contra el Fraude (SNCA), la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), la fiscalía y los tribunales competentes, mientras que los organismos implicados serán la entidad ejecutora y los órganos gestores.

El sistema de comunicación del Grupo TRAGSA, en lo relacionado con las medidas a adoptar para la corrección, incluye:

- Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones. En este caso, el Grupo TRAGSA como figura instrumental de la entidad ejecutora, comunicará el asunto a la entidad que corresponda en cada caso, y ésta lo comunicará a la entidad decisora y a la Autoridad Responsable. La Autoridad Responsable podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.
- Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades competentes, al SNCA para su valoración y eventual comunicación a la OLAF.
- Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.
- Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

- **Revisión de Expedientes**

Una vez concluida la investigación por parte de las autoridades competentes, o transferida a las autoridades pertinentes para su seguimiento, el Grupo TRAGSA revisará exhaustivamente cualquier proceso o procedimiento relacionado con el fraude potencial o probado, la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza económica análoga, así como los sistemas de control interno.

Además, el Grupo TRAGSA revisará los informes del resultado del test de autoevaluación relacionado con las medidas antifraude (**ANEXO II**).

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

Esta revisión debe ser objetiva y autocrítica, y en cooperación con las autoridades responsables de la investigación y en cumplimiento de la ley, así como con las autoridades judiciales, especialmente en lo que respecta a la conservación de los archivos en un espacio seguro y a las garantías de su transferencia en caso de cambios en el personal.

Como resultado de la revisión, el Grupo TRAGSA junto con el Comité Antifraude, expondrá conclusiones con respecto a los puntos débiles detectados y a las lecciones aprendidas, con acciones claras para establecer los mecanismos oportunos, responsables y plazos rigurosos.

- **Recuperación de importes percibidos (pagos indebidos), retirada de cofinanciación y acción penal**

Grupo TRAGSA informará a la Administración competente de los expedientes que se han visto afectados por un empleo fraudulento de los fondos.

La Administración junto con las autoridades competentes, serán las encargadas de exigir la recuperación de los importes indebidamente percibidos por parte de los beneficiarios, así como la retirada de cofinanciación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se identifique la incidencia detectada.

7. MEDIDAS Y PROCESOS RELATIVOS A SITUACIONES DE CONFLICTOS DE INTERES

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 establece que existe Conflicto de Interés “cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal”.

El enfoque destinado a detectar las situaciones que pueden generar este tipo de conflictos con el deber público, que pueden influir en cualquier fase del proceso de ejecución del presupuesto, también se tiene que abordar desde una perspectiva de prevención del fraude.

Es por ello, que en el marco de las actuaciones de prevención del fraude que incorpora el Plan de Medidas Antifraude, la identificación, prevención y detección de conflictos de interés constituye un punto de capital importancia en la estrategia de integridad y contra el fraude que persigue implantar el Grupo TRAGSA. Las situaciones de conflicto de intereses pueden producirse en cualquier momento, por tanto, se deben prevenir y abordar.

Grupo TRAGSA dispone de una Política de Conflicto de Intereses en vigor que aplica a todo el personal y órganos de gobierno que ocupen puestos con un margen de propuesta y decisión asociada a la gestión laboral, operativa, comercial, económico-financiera, jurídica, de contratación, o que tengan relación con proveedores, clientes o contrapartes.

La Política de Conflictos de Intereses de Grupo TRAGSA define lo que es un conflicto de intereses, y distingue entre conflictos de intereses aparente, potencial, real y percibido.

- **Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI)**

En el Grupo TRAGSA es de obligación declarar de manera proactiva cualquier posible conflicto de intereses, tal como se establece en la política anteriormente mencionada. Se dispone para ello de un formulario que está a disposición de todos los empleados.

Adicionalmente y de manera específica para el PRTR, se ha implementado un nuevo formulario de DACI que, en línea con los requisitos de las distintas administraciones, establece la obligatoriedad de cumplimiento obligatoria de la ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes en los procedimientos de ejecución del PRTR.

Todos los aspectos a los que hace referencia el **ANEXO I** del presente Plan Antifraude vienen explícitamente reflejados en la normativa interna de la empresa PRP.10 POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES DEL GRUPO TRAGSA, la cual está a disposición de todos los trabajadores que se pudiesen ver afectados por un conflicto de intereses en algún momento.

Se contará con una base de datos para evidenciar: la existencia de los documentos en cada uno de los proyectos NG, la ubicación de los mismos y el responsable de su custodia.

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

En particular, la POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES del Grupo TRAGSA tiene por objeto la gestión de los conflictos de interés (que no se trata necesariamente de un acto de corrupción en sí mismo), para asegurar la imparcialidad del personal de Grupo TRAGSA como servidores públicos, necesaria para actuar con objetividad en la consecución del interés general y para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

Para ello, en el mencionado documento se acota el ámbito de aplicación de la misma a la totalidad de los empleados del Grupo TRAGSA, y para ello se requiere cumplimentar la correspondiente declaración de conflicto/ausencia de conflicto de intereses que se proporciona a cada empleado.

8. MEDIDAS Y PROCESO RELATIVOS A LA DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS

8.1. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN

El Grupo TRAGSA mantiene un adecuado control sobre la detección de documentos falsificados mediante las siguientes actuaciones:

- Procedimientos y protocolos para la seguridad de la documentación física.
- Sistema de gestión de la seguridad para la información en soporte lógico.
- Uso sistematizado de plataformas tecnológicas de consistencia contrastada que aseguran la trazabilidad y la unicidad de los registros.
- Acceso mediante distintos niveles de seguridad según perfiles y autorizaciones.
- Uso extensivo de certificados digitales.
- Comprobación y cruce de dato.

Sistema de comunicación:

El Grupo TRAGSA notificará al Servicio Nacional de Coordinación Contra el Fraude (SNCA) y, en su caso, a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) de los casos de documentación falsificada.

Además, si los hechos fueran punibles, denunciará la situación a las autoridades correspondientes (fiscalía y órganos judiciales).

9. DOBLE FINANCIACIÓN

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento del MRR, se produce doble financiación cuando las reformas y proyectos de inversión estén financiados por el Mecanismo y simultáneamente por otro instrumento de la Unión, comprendiendo todos los programas ya sean de gestión compartida o directa, siempre que cubran el mismo gasto o coste. Sin embargo, el PRTR amplía el concepto de doble financiación a la concurrencia de fondos procedentes de subvenciones nacionales con la financiación del Mecanismo.

El Grupo TRAGSA aplicará procedimientos en los casos que así se requiera que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas de Estado, así como garantizar la ausencia de doble financiación. Para ello, estos procedimientos estarán alineados con el artículo 7 y los Anexos II.B.6 y III.D de la OM de Gestión, sobre la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.

- **Aplicación de la normativa**

El concepto de ayuda de Estado viene recogido en los artículos 107-109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo.

Considerando el punto (8) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que «Las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales».

El apartado 4.6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), sobre control y auditoría, incluye expresamente las ayudas de Estado como parte de la acción de control en la ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y especifica que la doble financiación «en el caso de las subvenciones públicas, no sólo alcanza a la doble financiación comunitaria, sino a cualquier exceso de financiación que pudiera producirse con independencia de su origen».

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero) establece expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las subvenciones, señalando en el artículo 191 que «En ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos».

El considerando 62 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, establece que las acciones previstas en dicho Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos, en el caso concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El artículo 9 del citado Reglamento dispone que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

- **Autoevaluación**

Se trata de un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar mínimo, que el Grupo TRAGSA deberá cumplimentar parcialmente y en los aspectos que le corresponden, de forma periódica en función del riesgo detectado en los informes de resultados. Se proporciona en el Anexo II.B.6 y III.D de la OM de Gestión y se ha adaptado como **ANEXO VI** de este documento.

- **Declaración de Gestión en la solicitud de pago**

En el PRTR se contempla realizar varias solicitudes de pago a la Comisión Europea. Estas solicitudes están asociadas al cumplimiento de hitos y objetivos y, en función del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, deben llevar adjunta «una declaración de gestión en la que se indique que [...] los fondos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión Europea, de conformidad con el principio de buena gestión financiera».

Los órganos de control supervisarán que los órganos que ejecuten actuaciones del PRTR, así como otras entidades a las que se haya encomendado la ejecución de actuaciones del PRTR, aporten la mencionada declaración de gestión en relación con la prevención del fraude. La periodicidad se adecuará al calendario previsto.

- **Gestión y control interno**

El Grupo TRAGSA utilizará su propio sistema de control para asegurar que los fondos se han gestionado de acuerdo con la normativa mencionada que eviten la doble financiación. Además, la IGAE podrá llevar a cabo auditorías específicas para comprobar la ausencia de doble financiación.

Dentro del control interno se tendrán en cuenta las actuaciones de mayor riesgo que puede llevar a cabo cualquier persona física o jurídica interviniente en la medida.

10. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación que evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Plan y en la gestión y/o ejecución de los fondos del MRR, deberá ser conservada por un periodo no inferior a diez años desde la terminación del proyecto financiado con dichos fondos.

La conservación de dicha documentación comprende el documento original o una copia de esta con fuerza probatoria. No obstante, lo anterior, transcurridos cinco años desde la terminación de proyecto financiado con dichos fondos, la documentación conservada será accesible por el Comité Antifraude.

La documentación deberá ser conservada en soporte informático. Las copias de los documentos de identificación serán conservadas en soportes informáticos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización.

En todo caso, el sistema de archivo deberá asegurar la adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las Autoridades Competentes.

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El Grupo TRAGSA hará un seguimiento y evaluación del Plan de Medidas Antifraude con el objetivo de mantenerlo actualizado y acorde a las directrices nacionales y europeas.

11.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación del Plan de Medidas Antifraude se realizará anualmente. Los Coordinadores Antifraude enviarán previamente un Informe de Seguimiento con el que se elaborará el informe de evaluación anual para el Comité Antifraude con el objetivo de velar por su cumplimiento a efectos regulatorios y prácticos, así como de identificar aspectos de mejora.

El seguimiento y evaluación podrán efectuarse a través de las aportaciones recibidas por las entidades y órganos gestores/ejecutores a través de los formularios puestos a disposición y/o según las conclusiones de auditorías donde se identifiquen nuevos mecanismos de control necesarios.

En caso de que se detecte algún riesgo e independientemente de la periodicidad anual, de la revisión de la autoevaluación de riesgos, se efectuará un seguimiento de las medidas incluidas en el Plan.

Así mismo, en el caso de que se materialice un acto contrario a la integridad, de fraude o de corrupción, el Grupo TRAGSA debe analizar los hechos ocurridos y determinar las modificaciones necesarias a realizarse en las estructuras y procesos de control.

11.2. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Anualmente se analizará la necesidad de incluir y/o actualizar los procedimientos contemplados en el Plan, con el objetivo de prevenir irregularidades.

11.3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTUALIZACIONES O CAMBIOS

El Plan de Medidas Antifraude será publicado en la web del Grupo TRAGSA y difundido a todo a todo personal, especialmente a las unidades gestoras.

Se hará especial hincapié en la difusión de nuevas incorporaciones o cambios derivados de la revisión del Plan.

12. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Orientaciones de la Comisión Europea de fecha 9 de abril de 2021 (Orientaciones de cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés con arreglo al Reglamento Financiero).
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n^o966/2012 (1) Reglamento Financiero.
- Reglamento (UE, Euratom) n^o966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n^o1605/2002 del Consejo (2) Reglamento Financiero.
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación.
- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (3) (4) Directiva sobre contratación pública.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y su normativa en desarrollo.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa en desarrollo.
- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto Ley 36/2020, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PLAN ESPECÍFICO DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PRTR

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.